



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021)

EJECUTANTE	MARY LUZ MONTES VERA
EJECUTADA	ANGELA MARIA MUÑOZ
TIPO DE PROCESO	EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL	05001-31-05-009-2020-0417-00
RADICADO INTERNO	070-21
ASUNTO	APELACIÓN AUTO QUE RECHAZÓ LA DEMANDA
DECISIÓN	REVOCA

En la fecha indicada, procede la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a decidir de fondo el recurso de apelación formulado contra el auto del 12 de febrero de 2021¹.

I. ANTECEDENTES

La señora Mary Luz Montes Vera formuló -a través de apoderado-, demanda ejecutiva laboral contra Ángela María Muñoz por la suma de ochenta millones de pesos (\$80.000.000), intereses moratorios que considera causados desde el 02 de octubre de 2020 y las costas del proceso², con fundamento en un acuerdo de transacción para el pago de todas las obligaciones laborales originadas en los servicios prestados como empleada doméstica. Dicho acuerdo se firmó el día 15 de agosto de 2020 por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000), y en el cual se pactó que pagaría la primera cuota el 01 de octubre del 2020, la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) y la segunda cuota el día 01 de diciembre del 2020, acuerdo del cual predica mérito ejecutivo. A la fecha de la presentación de la demanda la señora ANGELA MARIA MUÑOZ, ha incumplido la obligación adquirida y reconocida en el contrato de transacción, obligación que se venció el día 02 de octubre de 2020.

Igualmente deprecó medida cautelar consistente en oficiar “*al Juzgado 1 Civil de Circuito de Itagüí, radicado 2018-88 donde también es demandada la señora ANGELA MARIA MUÑOZ, demandante Banco COLPATRIA, para que se decrete el embargo de los remanentes del proceso que cursa en ese despacho, indicando además que se trata de una concurrencia de embargos, porque ese proceso estamos ante una acreencia laboral*”.

¹ 08RechazaNosubsano
² 04Demanda Ejecutiva MARY LUZ MONTES VERA. Pág.2

Mediante auto del 7 de diciembre de 2020, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín devolvió la demanda³, exigiendo los siguientes requisitos:

- *Allegar al plenario el presunto contrato transaccional debidamente diligenciado ante autoridad competente, en atención al contenido del parágrafo del art. 54 A del CPTSS y el art. 422 del CGP.*
- *Presentar denuncia de bienes de la ejecutada, bajo juramento, según lo dispuesto en el art.101 del CPTSS.*

La parte ejecutante pretendió subsanar requisitos mediante memorial radicado vía electrónica el 12 de diciembre de 2020⁴, señalando respecto de la primera exigencia, que de requerirse el documento con las firmas originales de las partes, se autorice el ingreso de Juan Carlos Jaramillo Restrepo, quien se identifica con CC 71.654.079; considera que el documento aportado virtualmente cumple los requisito formales y materiales exigidos para prestar mérito ejecutivo. En cuanto a la segunda exigencia, reiteró su solicitud de medida cautelar, esta vez omitiendo la petición del oficio dirigido al Juzgado 1 Civil del Circuito de Itagüí, se decir, limitándose a solicitar el embargo de remanentes resultantes del proceso tramitado en el referido juzgado con el radicado 2018-00088⁵.

La ejecutante allega subsanación de requisitos⁶ indicando que, si el juzgado requiere el documento con las firmas originales, solicita la cita para hacer llegar el contrato y que se autorice la entrada del señor de Juan Carlos Jaramillo Restrepo; además manifiesta que la transacción reúne todos los requisitos de validez y con ello nace a la vía jurídica la obligación conforme dispone el Código Civil en sus artículos 1495 al 1501 y 2469 referida a la transacción, y el artículo 15 del CST que avala esta figura en materia laboral cuando no trate de derechos ciertos e indiscutibles, de igual manera con la pandemia que se vive actualmente por el COVID-19 se permitió unas medidas administrativas para viabilizar algunos tramites de manera virtual sin que exija la presentación personal, por lo tanto la autenticación no es indispensable para que la obligación tenga validez jurídica y solicita el embargo de los remanentes de la señora Angela Muñoz en el proceso 2018-88 donde en dicho caso el demandante es Colpatria.

Por auto del **12 de febrero de 2021**, fue rechazada la demanda ejecutiva, aduciendo la no satisfacción de requisitos exigidos en auto anterior, al no aportar el contrato transaccional, ni pronunciarse en torno a la exigencia relacionada con la medida cautelar⁷.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte ejecutante formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación⁸, pues al radicar la demanda aportó el contrato de transacción suscrito entre las partes, como documento virtual que presta mérito ejecutivo, debiendo

³ 05ExigeRequisitos

⁴ 06RecibidoRequisitos

⁵ 07MemorialCumplimiento

⁶ 06RecibidoRequisitos

⁷ 08RechazaNoSubsano

⁸ 09RecibidoRecurso, 10MemorialRecurso

presumirse su validez, el cual podría ser eventualmente atacada por la pasiva. En cuanto al requisito exigido en torno a la medida cautelar, refiere solicitar el embargo de remanentes del proceso ya mencionado y que la ejecutada no tiene otros bienes.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante remitió memorial vía electrónica el 26 de marzo de 2021, cuyo asunto es “RECURSO DE APELACIÓN” y al final del mismo solicita conceder el referido recurso, es decir, no descorrió el traslado concedido, por tanto, su memorial será desestimado por la Sala.

II. CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del literal B del art.15 del CPTSS y el numeral 8 del art. 65 del referido código.

El problema jurídico se circunscribe a determinar si los requisitos exigidos por el A-quo para efectos de librar mandamiento ejecutivo y acceder a la medida cautelar deprecada, están ajustados a derecho o sí, por el contrario, basta con la aportación del documento medio magnético al radicar virtualmente la demanda, para que proceda la orden de apremio. Igualmente, de haber lugar a ello, se definirá si la parte ejecutante satisfizo la orden impartida en el auto de devolución en torno a la denuncia de bienes de la ejecutada bajo juramento.

De la aportación y la conservación del título ejecutivo en vigencia del Decreto 806 de 2020

Al devolver la demanda ejecutiva, el juez fundamenta su decisión en el párrafo del art.54 A del CPTSS modificado por el art.24 de la ley 712 de 2001, concordado con el art.422 del CGP. El tenor literal de dichas normas, es el siguiente:

Parágrafo art.54 del CPTSS: “En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.

Art.422 del CGP: “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no

constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.

La norma que regula qué obligaciones prestan mérito ejecutivo en el proceso laboral es el **art. 100 del CPTSS**, el cual consagra que puede ser exigible ejecutivamente “*el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme (...)*”.

Ha definido la doctrina⁹ el título ejecutivo, como todo documento, incluyendo las providencias judiciales y arbitrales, provenientes del deudor o de su causante, donde consta una obligación clara, expresa y exigible en favor de su acreedor o del tenedor legítimo. Siendo posible entonces, demandar “*ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles **que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él...***”, por así disponerlo el artículo 422 del CGP, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral.

Ahora, sobre las exigencias que deben cumplir explicó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral¹⁰ que:

*“Vale la pena recordar que los títulos ejecutivos deben cumplir unos requisitos formales y sustanciales. **Los primeros** exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) **sean auténticos** y (ii) **emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de un acto administrativo en firme.** Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. **Los segundos**, reclaman que el título ejecutivo **contenga una prestación** en beneficio de una persona que debe ser **clara, expresa y exigible.***

La exigencia de claridad, hace alusión a que los elementos constitutivos emerjan perfectamente de la lectura del título ejecutivo, sin que sean necesarios esfuerzos de interpretación para establecer cuál ha de ser la conducta que debe exigírsele al deudor o el monto de la obligación, en otras palabras, debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones.”

En otras palabras, la obligación es **clara** cuando no da lugar a equívocos porque están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; es **expresa** cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación, y es **exigible** si se trata de una obligación pura y simple ya declarada. Conviene distinguir que cuando la obligación, con las características anteriores, está contenida o constituida en un solo documento, como, por ejemplo, un título valor como la letra de cambio, cheque, pagaré, entre otros, será un título ejecutivo singular, por el contrario, cuando está integrado por un conjunto de documentos, será complejo.

⁹ LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, *Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano*, Dupré Editores, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 1999, pags. 388.

¹⁰ M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas, STL17262-2016 y Radicación No. 45312.

De otro lado, se tiene que el **Art. 244 del CGP**, norma posterior a la Ley 712 de 2001 que modificó el CPTSS, va más allá del párrafo del art.54 A del mismo y dispone:

“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”. (subrayas intencionales de la sala)

Asimismo, en momento anterior a la radicación de la demanda, fue expedido el Decreto 806 de 2020 cuyo objetivo es la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales, como medida protección del riesgo de contraer el virus de covid-19 cuya presencia en Colombia ha desatado las nefastas consecuencias conocidos por la generalidad de los habitantes del territorio nacional.

El inciso segundo del **art.2 del Decreto 806 de 2020** contempla que *“Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.*

Lo anterior, aunado al contenido del Art. 244 del CGP previamente transcrito permite aseverar que la exigencia elevada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, permite concluir que la exigencia del auto de devolución de la demanda, aún cuando la parte ejecutante con el escrito de demanda presentó en medio magnético el contrato de transacción que sirve de base a sus pretensiones¹¹, excede las facultades del

¹¹ 04DemandaEjecutiva MARY LUZ MONTES VERA. Págs.5/8

juzgador, quien debió presumir la autenticidad del documento en los términos de las normas en cita o, en defecto suyo, si en gracia de discusión se pretendiera dar una interpretación exegética al parágrafo del art.54 A del CPTSS a pesar de la vigencia posterior del CGP, se considerase que la custodia del contrato de transacción original debía estar radicada en durante la vigencia del proceso en el despacho judicial, en momento anterior a emitir un pronunciamiento en torno a la devolución de la demanda, debió requerir a la parte a fin de que hiciera la aportación del documento contentivo de la obligación que se pretende ejecutar.

Con la actuación del despacho no sólo incurre en la exigencia de una formalidad innecesaria si no que la misma es imposible de cumplir a la parte ejecutante, pues no se le genera el espacio para aportar en físico el documento.

De ahí que auto mediante el cual se rechazó la demanda, aún cuando se le insistió en la previa aportación magnética del documento o la necesidad de una cita para que un tercero lo allegara físicamente, no pueda considerarse ajustado a derecho si no, por el contrario, se erige en un acto constitutivo de la vulneración el derecho a la administración de justicia, del cual es precisamente guardián.

En este sentido ya existe pronunciamiento de oct.1 de 2020) emanado del Tribunal superior de Bogotá, según el cual: *“si la demanda se radica en esta forma, esto es, como mensaje de datos, todos sus anexos, entre ellos el documento que preste mérito ejecutivo, deben allegarse en medio electrónico. Entonces, ninguno de estos documentos se debe aportar en copia física, ni para el archivo, ni para el traslado y si ello es fundamental el juez debe abstenerse de exigir formalidades innecesarias. En conclusión, no es aceptable que el título valor deba allegarse como documento adjunto, bajo el entendido de que es el original el que soporta la pretensión ejecutiva. Ahora su conservación le corresponde al ejecutante y no al juzgado, como solía suceder. El tema es de conservación del documento y no de aportarlo”* (M. P. Marco Antonio Alvarez Gómez).

Por lo dicho, el auto apelado será **revocado** y se ordenará al A-quo que proceda al análisis que corresponde para determinar si el documento glosado con la demanda presta mérito ejecutivo, es decir, si contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, susceptible de obtener su cumplimiento en la vía del proceso ejecutivo laboral.

No hay lugar a que la Sala se pronuncie en torno a la decisión adoptada en relación con la medida cautelar deprecada con la demanda, toda vez que no se ordenó librar mandamiento de pago.

III. COSTAS

Al haber salido avante el recurso de apelación no se causaron costas para la parte recurrente, de conformidad al numeral 1° del artículo 365 del Código General del proceso.

IV. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto del 12 de febrero de 2021, emitido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ejecutivo promovido por MARY LUZ MONTES VERA contra ÁNGELA MARÍA MUÑOZ, y en su lugar **ORDENAR** que se proceda al análisis correspondiente para determinar si el documento glosado con la demanda presta mérito ejecutivo, es decir, si contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, susceptible de obtener su cumplimiento en la vía del proceso ejecutivo laboral.

SEGUNDO: Sin costas en esta sede.

TERCERO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

Se ordena notificar lo resuelto por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que el anterior auto fue notificado por ESTADOS N°69 fijados hoy 26 de abril de 2021 a las 8:00AM

El secretario